

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD

Bogotá D.C, Once (11) de Abril de dos mil veintitrés (2023)

Tutela
2023-00177

I. ASUNTO:

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a resolver la acción de tutela instaurada por **MAURICIO BETANCOUR HERNANDEZ**, actuando como representante legal de la empresa **TRANSPORTE ESPECIALIZADOS JR SAS Nit. 830033581-0** en contra de la **SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE**.

II. ANTECEDENTES:

2.1. HECHOS (SÍNTESIS):

2.1.1.- Manifiesta el accionante que, la Supertransporte, mediante derecho de petición radicado a través del correo electrónico vur@supertransporte.gov.co, el día 20 de febrero de 2023, se radico alcance a la respuesta con Radicado No: 20235410030021 del 27/01/2023 donde pretende, se reconozca el saldo a favor y se realice la devolución del valor pagado en razón a la multa impuesta mediante la Resolución 26326 del 01 de julio de 2016.

2.1.2.- Sostuvo que, el 02 de diciembre de 2022 con radicado 20225341829662, se solicitó ante esa entidad la devolución del dinero cancelado en razón a 9 multas pagas y posteriormente revocadas, a lo que mediante respuesta con Radicado No. 20235410030021 del 27/01/2023, la entidad entre otras cosas manifiesta lo siguiente:

Resolución 26326 del 01 de julio de 2016

A través de la Resolución 47927 del 27 de septiembre de 2017, la entonces Superintendencia de Puertos y Transporte revocó la Resolución 26326 del 01 de julio de 2016 y ordenó el archivo definitivo de la investigación administrativa; generándose así, un saldo a favor de la vigilada por la suma de \$3.124.987.

Sin embargo, es importante mencionar que el artículo 2356 del Código Civil, modificado el artículo 8 de la Ley 791 de 2002, establece frente a la acción ejecutiva, lo siguiente: "ARTÍCULO 8o. El artículo 2536 del Código Civil quedará así:

"El artículo 2536. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5). (...)"

Teniendo en cuenta la normatividad en cita, se tiene que el vigilado contaba con un término de cinco (5) años a partir de la fecha de ejecutoria de la Resolución

47927 del 27 de septiembre de 2017, es decir desde el día 06 de octubre de 2017, para presentar la solicitud de devolución de recursos.

No obstante, la referida solicitud se presentó solamente hasta el día 02 de diciembre de 2022, superando el término máximo estipulado por la Ley para tal fin. Por tal motivo, no es procedente acceder a la solicitud de devolución de recursos presentada.

3. De lo anterior cabe realizar las siguientes precisiones:

3.1. La entidad no está teniendo en cuenta la suspensión de los términos a partir del 30 de marzo de 2020, mediante la Resolución 6255 del 29 de marzo de 2020, y reanudados el 21 de octubre de 2020 mediante Resolución 7770 del 19 de octubre de 2020.

2.2. PETICIÓN:

Solicita:

"Solicito la protección inmediata, mediante la presente acción y se ordene a la accionada. Se TUTELE el Derecho Fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, en consecuencia, se resuelva de fondo la solicitud.." (Archivo digital 04).

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

Mediante auto del 23 de marzo de 2022 se admitió la acción constitucional (archivo digital 08), en el que se ordenó, notificar a las partes, y solicitarle al accionado contestar el libelo dentro del término de dos (2) días.

3.1. RESPUESTA:

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE (archivo digital 010): solicita se DENIEGUE la acción de tutela por CARENIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO a la emisión de la Resolución SUB 344115 del 16 de diciembre de 2022.

Que la Superintendencia de Transporte a través del oficio con identificación número 20235410217151 del 24 de marzo dio contestación integral a la solicitud con radicación 20235340208762 del 20 de febrero de 2023 al indicarle la procedencia devolución de saldo por concepto de la multa administrativa impuesta mediante la Resolución 26326 del 01 de julio de 2016.

La respuesta impartida cumple y garantiza los presupuestos de legalidad del presupuesto público que cimientan el actuar de la administración (marco constitucional y legal) conforme lo definido por los artículos 121 y 122 constitucionales.

Como consecuencia de lo anterior, debe precisarse, que las pretensiones de la acción de tutela no requieren ser objeto de protección, como quiera que la entidad ya atendió de fondo la solicitud presentada por el accionante y que dio lugar a la acción de tutela de la referencia, por lo que ha de considerarse que se configuró un hecho superado. (Archivo digital 010).

IV. CONSIDERACIONES:

4.1. COMPETENCIA:

Este Juzgado es competente para conocer de la acción de tutela con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991.

4.2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

La acción de tutela se instituyó por el constituyente de 1991, en el artículo 86 de la Constitución Política, con la finalidad exclusiva de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las personas cuando estos sean violados o puestos en peligro por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, estos últimos, en los casos expresamente señalados por la ley.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento preferente y sumario es procedente siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial que sea idóneo, apreciado en concreto, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por lo mismo, no es alternativo sino residual.

Según lo previsto en el numeral 2º del Decreto 306 de 1992 (reglamentario del Decreto 2591 de 1991), dicha acción protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, por ende, no puede emplearse, para hacer respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

4.2.1. DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

- Legitimación por activa

El artículo 86 de la Constitución Política dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto constitucional se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el que se consagra que *“la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”*.

En el caso bajo examen, el señor **MAURICIO BETANCOUR HERNANDEZ**, actuando como representante legal de la empresa TRANSPORTE ESPECIALIZADOS JR SAS acudió a la acción de tutela para que se protegiera el derecho fundamental de petición, el cual afirma está siendo conculcado como consecuencia de la falta de una respuesta por parte de la accionada. Por lo anterior, se encuentra legitimado en la causa por activa para presentar la acción constitucional.

- Legitimación por pasiva:

Como quiera que la legitimación por pasiva atiende a la capacidad legal de **SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE** contra quien se dirige la acción, a efectos de que

sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales, el inciso primero del artículo 86 Constitucional señala que procede la acción de tutela cuando los derechos fundamentales *“resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”* o por cualquier particular. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que la acción se puede invocar contra una autoridad pública que haya vulnerado o amenazado algún derecho de rango constitucional fundamental.

En el asunto sub-judice, se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva de **SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE** entidad a la que se le endilga la presunta actuación que se considera lesiva del derecho fundamental invocado por la accionante, y que se relaciona con la omisión de darle una respuesta a su petición.

- Inmediatez:

La Corte Constitucional indicó en la Sentencia SU-961 de 1999 que *“La tutela debe interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser procedente en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros”*.

En el presente asunto, se tiene que, entre la fecha de radicación de la petición por parte del accionante ante **SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE** el 20 de febrero de 2023 (archivo digital 003), y en la que presentó la acción constitucional, 21 de marzo de 2023 (archivo digital 006), ha transcurrido poco más de veinte (20) días, por lo cual, este Despacho considera que se cumple con este requisito.

- Subsidiariedad:

Al respecto, en Sentencia T-422 de abril 26 de 2001 la Corte Constitucional señaló: *“(…) la naturaleza de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 de la Carta Política y 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991, es la de ser un medio de defensa judicial subsidiario y residual que sólo opera cuando no existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de existir, se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de manera que no puede utilizarse para remplazar los procesos judiciales o administrativos, pues su finalidad no es otra que brindar a las personas una protección efectiva, real y eficaz, para la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales. En consecuencia, riñe con la idea de admitirla a procesos administrativos o judiciales en curso o ya terminados, en cuanto unos y otros tienen mecanismos judiciales ordinarios para la protección de derechos de naturaleza constitucional o legal, que por lo tanto la hacen improcedente”*.

En el presente caso, la parte actora no cuenta con un mecanismo judicial eficaz diverso al que nos ocupa para obtener respuesta de fondo por parte del accionado a la petición que elevó el 20 de febrero de 2023, lo que hace viable esta acción.

Establecida entonces la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, se continuará con el examen de los asuntos de fondo.

4.2.1. ALCANCE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN:

El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política y dispone que: *“Toda persona tiene derecho a presentar*

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (...)"'. En torno a este derecho la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 2007, expresó:

"1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho de petición comprende los siguientes elementos o características:

(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;

(ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico;

(iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados; es decir, que haya correspondencia entre la petición y la respuesta, sin fórmulas evasivas o elusivas;

(iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable".

En el mismo sentido, la Sentencia T-957 de 2004 indicó que la respuesta a los derechos de petición debe ser de fondo, pues:

"la Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas oportunidades sobre el contenido y el alcance generales del derecho de petición, en virtud del cual toda persona puede presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, y obtener una pronta resolución. Según se ha precisado en la doctrina constitucional, esta garantía constitucional "consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada". Asimismo, tal respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible, "pues prolongar en exceso la decisión de la solicitud, implica una violación de la Constitución".

A su vez, la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 1755 de 2015, en su artículo 13 prescribe que: *"(...) Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. (...)"*.

Así mismo, la Ley 1755 de 2015 establece los términos para resolver las distintas modalidades de petición en su artículo 14, señalando que la regla general es que *"toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción (...)"* y que se encuentran sometidas a un término especial las peticiones de documentos y de información que *"deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción"* y las peticiones mediante las cuales se elevan consultas a las autoridades en relación con las materias a su cargo, las cuales *"deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción"*.

Conforme a lo expresado, las respuestas emitidas por las autoridades en atención a las peticiones elevadas por los particulares deben ser oportunas, prontas y de fondo, es decir, que resuelvan en forma completa y total las solicitudes presentadas, en forma clara, precisa y congruente con la solicitud. Adicional a lo anterior, la petición debe

ser puesta en conocimiento del solicitante, toda vez que lo contrario tornaría ineficaz el derecho de petición que, se reitera, es de rango constitucional.

V. CASO CONCRETO

5.1.- El problema jurídico a desatar consiste en determinar si **La SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE** vulneró el derecho fundamental de petición del señor **MAURICIO BETANCOUR HERNANDEZ**, actuando como representante legal de la empresa **TRANSPORTE ESPECIALIZADOS JR SAS** respecto del derecho de petición presentado el 20 de febrero de 2023.

5.2.- Ahora bien, se encuentra incorporada al expediente la petición elevada por el accionante ante SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE el 20 de febrero de 2023, radicado y debidamente certificado mediante correo electrónico de **LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE**.

5.3.- Como respuesta, **SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE**, el 27 de marzo de 2023 contestó el derecho de petición de la siguiente manera:

“Señor:

Mauricio Eugenio Betancourt Hernández Representante Legal
Transportes Especializados JR S.A.S.

maube63@hotmail.com

Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta al radicado 20235340208762 del 20 de febrero de 2023.

En atención al radicado indicado en el asunto, por medio del cual la empresa TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S., identificada con NIT. 830033581 - 0, solicitó la devolución del saldo a favor generado como consecuencia de la revocatoria de oficio de la multa administrativa impuesta mediante la Resolución 26326 del 01 de julio de 2016, considerando que, a diferencia de lo indicado en el oficio número 20235410030021 del 27/01/2023, la empresa se encuentra dentro del término para realizar dicha solicitud; de manera atenta, esta Dirección Financiera se permite informar lo siguiente:

Sea lo primero indicar que mediante el radicado 2023541003002 del 27 de enero de 2023, esta Dirección informó a la empresa que no era procedente efectuar la devolución del saldo a favor por la suma de \$3.124.987, generado como consecuencia de la revocatoria de la multa número 26326 del 01 de julio de 2016. Lo anterior teniendo en cuenta que la solicitud de devolución se presentó por fuera del término legal estipulado para tal efecto 1.

Sin embargo, a través de la petición presentada en el radicado referenciado en el asunto, la vigilada argumenta que la Entidad no tuvo en cuenta la suspensión de términos ordenada por medio de la resolución número 6255 del 29 de marzo de 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria decretada por la propagación del coronavirus COVID 19.

En ese sentido, se procedió a realizar el análisis de la situación en particular, evidenciando lo siguiente:

- La Resolución 47927 del 27 de septiembre de 2017, que ordenó revocar la

Resolución 26326 del 01 de julio de 2016, quedo ejecutoriada el día 06 de octubre de 2017, fecha a partir de la cual el vigilado podía presentar la solicitud de devolución de recursos.

- Por medio de la Resolución No. 6255 del 29 de marzo de 2020, la Superintendencia de Transporte ordenó suspender, desde el 30 de marzo de 2020, los términos en los trámites administrativos adelantados en la Entidad. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 491 de marzo 28 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional para mitigar la propagación del COVID – 19.

- A través del artículo 5 de la Resolución 7770 del 19 de octubre de 2020, la Entidad ordenó reanudar los términos de las actuaciones adelantadas ante la Secretaría General, a partir del 02 de noviembre de 2020.

- La empresa TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S., identificada con NIT. 830033581 – 0, presentó la solicitud de devolución de los recursos pagados por concepto de la multa administrativa impuesta a través de la Resolución 26326 del 01 de julio de 2016, el día **02 de diciembre de 2022**.

Conforme a lo expuesto, se concluye que al tener en cuenta la suspensión establecida en la Resolución 6255 del 29 de marzo de 2020, la solicitud fue presentada dentro del término de los cinco (5) años, tal como se relaciona.

De lo anterior, se tiene que desde la ejecutoria de la resolución hasta la fecha de la presentación de la solicitud de devolución transcurrieron 1.666 días que corresponden a 4 años, 6 meses y 24 días. Es decir, la solicitud se presentó dentro del término establecido, razón por la cual es procedente realizar la devolución del saldo requerido, para lo cual la empresa deberá tener en cuenta el procedimiento establecido para tal efecto, el cual fue indicado previamente en el numeral 1 del oficio 20235410030021 del 27/01/2023.

De tal forma que, una vez presentados los documentos requeridos, y validados por parte de esta Dirección Financiera, la Secretaria General como ordenadora del gasto procederá a expedir una resolución donde reconozca el saldo a favor de la vigilada y ordene su devolución.

5.4.- Conforme a lo expuesto, refulge para este despacho judicial que, respecto al derecho de petición presentado por el accionante el 20 de febrero de 2023 ante **SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE**, el mismo fue atendido de manera clara, congruente y de fondo por dicha entidad. Ello, por cuanto, a través del documento adjunto, otorgó respuesta informando mediante resumen detallo la respuesta. Todo lo anterior, le fue notificado en debida forma a la empresa accionante a través de su representante legal a la dirección que reposa en su solicitud maube63@hotmail.com (página 7-10, archivo digital 010).

Bogotá, 24-03-2023

Al contestar citar en el asunto

Radicado No.: 20235410217151
Fecha: 24-03-2023

Señor:
Mauricio Eugenio Betancourt Hernández
Representante Legal
Transportes Especializados JR S.A.S.
maube63@hotmail.com
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta al radicado 20235340208762 del 20 de febrero de 2023.

Respetado Señor Betancourt:

En atención al radicado indicado en el asunto, por medio del cual la empresa TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S., identificada con NIT. 830033581 - 0, solicitó la devolución del saldo a favor generado como consecuencia de la revocatoria de oficio de la multa administrativa impuesta mediante la Resolución 26326 del 01 de julio de 2016, considerando que, a diferencia de lo indicado en el oficio número 20235410030021 del 27/01/2023, la empresa s se encuentra dentro del término para realizar dicha solicitud; de manera atenta, esta Dirección Financiera se permite informar lo siguiente:

Sea lo primero indicar que mediante el radicado 2023541003002 del 27 de enero de 2023, esta Dirección informó a la empresa que no era procedente efectuar la devolución del saldo a favor por la suma de \$3.124.987, generado como consecuencia de la revocatoria de la multa número 26326 del 01 de julio de 2016. Lo anterior teniendo en cuenta que la solicitud de devolución se presentó por fuera del término legal estipulado para tal efecto ¹.

Sin embargo, a través de la petición presentada en el radicado referenciado en el asunto, la vigilada argumenta que la Entidad no tuvo en cuenta la suspensión de términos ordenada por medio de la resolución número 6255 del 29 de marzo de 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria decretada por la propagación del coronavirus COVID 19.

@SuperTransporte

Información

Canal Electrónico

Certificado

Acta de Envío y Entrega de Correo Electrónico



SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S Certifica que ha realizado el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S** el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id mensaje:	773
Emisor:	enviosgestiondocumental@supertransporte.gov.co
Destinatario:	maube63@hotmail.com - TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.
Asunto:	NO 20235410217151 SUPERTRANSPORTE
Fecha envío:	2023-03-24 13:05
Estado actual:	Traza entrega al servidor de destino

Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
<div><p>Estampa de tiempo al envío de la notificación</p><p>El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - Artículo 23 Ley 527 de 1999.</p></div>	<p>Fecha: 2023/03/24 Hora: 13:09:17</p>	<p>Tiempo de firmado: Mar 24 18:09:16 2023 GMT Política: 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.3.0.</p>

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

Importante: En el aparte Acuse de Recibo, en los casos en que aparece la frase "Queued mail for delivery" se debe a las características del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, en estos casos, si el mensaje no pudo ser entregado dicho servidor enviará una segunda respuesta indicando que no fue exitosa la entrega del mensaje, si no hay una segunda respuesta del servidor de correo electrónico, quiere decir que tu mensaje fue entregado satisfactoriamente por lo que este documento pasa a constituir acuse de recibo

Contenido del Mensaje

Ahora bien, se encuentra acreditado que la accionada dio respuesta al derecho de petición radicado por el accionante el día 24 de marzo de 2023 es decir, que con se atendió la solicitud del accionante.

El derecho fundamental de petición invocado por **MAURICIO BETANCOUR HERNANDEZ**, actuando como representante legal de la empresa **TRANSPORTE ESPECIALIZADOS JR SAS** en su escrito de tutela, al momento de interponerse la acción constitucional ya no se encontraba conculcado, por lo que una intervención del juez constitucional en aras de garantizarlo resultaría ineficaz.

5.5.- Así las cosas, claro es que **SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE** resolvió de fondo el requerimiento elevado por el accionante el 20 de febrero de 2023, y que el mismo fue puesto su conocimiento.

En mérito de lo expuesto, la JUEZ NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley”,

VI. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR POR HECHO SUPERADO la concesión de amparo implorada por **MAURICIO BETANCOUR HERNANDEZ**, actuando como representante legal de la empresa **TRANSPORTE ESPECIALIZADOS JR SAS**, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los intervinientes, a través del medio más expedito. **SECRETARÍA PROCEDA DE CONFORMIDAD.**

TERCERO: Si no fuere impugnada la decisión, envíese a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned above the printed name.

CÉSAR ENRIQUE OSORIO ORTÍZ
JUEZ